

La herida invisible de la inseguridad

El reciente atentado incendiario contra la central hidroeléctrica Rucalhue no solo dejó tras de sí un paisaje de maquinaria calcinada y trabajadores lesionados. Lo que ardió esa madrugada en la provincia de Biobío fueron también las oportunidades de cientos de familias, el trabajo silencioso de pequeñas y medianas empresas, y la esperanza de desarrollo para territorios históricamente postergados.

Nueve empresas locales –la mayoría sin seguros comprometidos– vieron consumirse más de 5 mil millones de pesos en pérdidas materiales. Camiones, excavadoras, motoniveladoras: herramientas de trabajo de empresas que, en su mayoría, construyeron su capital con años de esfuerzo. Hoy, lo han perdido todo, pero el daño no termina en el balance contable: el atentado representa un golpe certero a la columna vertebral de las economías locales y a la confianza de quienes aún apuestan por emprender en la Macrozona Sur.

“Hace 30 años nos están quemando”, advirtió con rabia el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, un grito no solo refleja la impotencia del gremio del transporte, sino también el hastío de comunidades que se sienten abandonadas, expuestas al miedo y la violencia como paisaje cotidiano.

El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, fue claro en declarar que estos ataques arrastran consigo un impacto colateral que trasciende lo material, ya que dañan la imagen de comunas que han luchado por desarrollarse desde el turismo, la inversión y la colaboración entre vecinos.

El economista Carlos Smith, en tanto, lo explica con crudeza: “¿Qué empresa va a querer reponer maquinaria

si teme que se la vuelvan a quemar? ¿Qué aseguradora está dispuesta a cubrir ese riesgo?”. En su análisis, la inseguridad no solo precariza el presente, sino que compromete el futuro, porque pone en riesgo la inversión y las oportunidades que tanto hoy se necesitan, en todos nuestro país.

Frente a este escenario, los anuncios de querellas no bastan y los discursos de repudio tampoco; hace falta una política de seguridad integral, con una fuerte presencia estatal, coordinación intercomunal, inteligencia preventiva y, sobre todo, voluntad política.

En esa línea, la tarde de ayer jueves, a cuatro días de del mega-ataque a la central Rucalhue, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero llegó hasta Biobío parte ser parte de un “Comité de Seguridad” integrado también, por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, entre otras autoridades provinciales y locales. El objetivo evaluar el trabajo coordinado con la Defensa Nacional y las policías.

De esta instancia, se espera –precisamente– acciones concretas no sólo en la búsqueda de los responsables, sino mecanismos que permitan reestablecer el Estado de Derecho, y proteger a quienes trabajan, invierten y viven en territorios amenazados por el terrorismo y la violencia.

Porque cuando la inseguridad se vuelve parte del paisaje, no solo se incendian máquinas o se paralizan proyectos, sino que se acrecienta una herida que no siempre se ve, pero si se siente en cada familia que duda en quedarse, en cada empresario o emprendedor que renuncia a invertir y finalmente, en cada joven que mira hacia otro lugar para construir su futuro.